

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 342/17
H103064184652
H103064184652

**JUICIO: VISCIDO JUAN ANDRES c/ ASOCIART ART S.A. s/ COBRO DE PESOS.
EXPTE. N° 342/17**

San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en la causa del título "VISCIDO JUAN ANDRES c/ ASOCIART ART S.A. s/ COBRO DE PESOS" que tramitó ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, de cuyo estudio

RESULTA:

En fecha 29/03/2017 (fs. 15/520) el letrado Ángel Miguel Palacio, en su carácter de apoderado del Sr. Juan Andrés Viscido, DNI N° 27.652.094, con domicilio en calle 25 de mayo N° 2451, de esta ciudad y demás condiciones personales que constan en el poder ad litem agregado a f. 14, inició demanda contra Asociart ART SA, con domicilio en calle San Lorenzo N° 1064 de esta ciudad, por la suma de \$215.267,19 en concepto de diferencias de las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial permanente y definitiva, art. 14 inciso 2 apartado "a" de la Ley N°24557, modificado por el art. 3 del Decreto N° 1694/09 y del art. 3 de la Ley N° 26773, cuyos montos deberán ser actualizados por el art. 8 de la misma ley.

En cuanto a la relación laboral de su mandante expuso que el Sr. Arrieta ingresó el 10/04/2007 y el 06/12/2011 bajo subordinación económica, jurídica y técnica, para "Migra Distribuciones SRL" y "Robles Gonzalo Miguel" respectivamente. Precisó que las tareas que realizaba eran las propias de viajante, y consistían en la visita a comercios que explotaban el rubro de venta de artículos para bebés, para ambos empleadores-los dos vendían productos del rubro de bebé-, exhibía los productos, vendía y cobraba aquellos en la jurisdicción del NOA en las provincias de Salta, Catamarca e interior de Tucumán; añadió que el actor se encontraba comprendido en el esquema de pluriempleo. Remarcó que jamás recibió algún tipo de capacitación sobre las labores de "viajante no exclusivo".

Detalló que la jornada laboral era de lunes a sábados de 08:00 a 13:00 h y de 16:00 a 21:00 h, pudiendo extenderse el horario si las necesidades propias de la actividad así lo exigían, y los domingos si era necesario con una carga horaria de 09:00 a 13:00 horas.

Indicó que percibía comisiones por las ventas y cobranzas en forma mensual siendo el ingreso base mensual a los fines indemnizatorios la suma de \$15.132.

En relación al siniestro, sostuvo que el día 25/02/2015 el Sr. Viscido, mientras retiraba las mercaderías del automóvil para cumplir sus labores, fue embestido por una motocicleta que golpeó su pierna izquierda y en razón de que sus empleadores tenían cobertura de Asociart ART, se formalizó la denuncia.

Continuó expresando que, denunciado el siniestro, recibió atención médica por intermedio de los prestadores de Asociart ART SA en el sanatorio Pasquini SRL, como

consecuencia de la lesión de traumatismo de rodilla izquierda fue operado de los ligamentos cruzados y menisco.

Sostuvo que debido a que el trabajador tuvo secuelas incapacitantes es que la Comisión Médica N°1 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo determinó una incapacidad parcial permanente y definitiva del 13,70%, cobrando recién en ese momento la virtualidad de haberse configurado el supuesto de hecho previsto en las normas para que el trabajador damnificado pueda ser acreedor de las prestaciones dinerarias determinada por el art. 14 inciso 2 apartado "a" de la Ley N°24557, modificado por el art. 3 del Decreto N° 1694/09 y del art. 3 de la Ley N° 26773, cuyos montos fueron mejorados por el art. 8 de la misma ley.

Planteo la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley N° 24557.

Finalmente adujo que al haberse convertido en acreedor su mandante es que se le abonó las prestaciones dinerarias por un importe de \$146.605,81 en concepto de incapacidad parcial permanente y definitiva (art. 14.2" a" de la Ley N°24557) y art. 3 de la Ley N° 26773, expresó que dichas sumas deben ser tenidas en cuenta como un pago practicado en forma parcial e insuficiente (art. 260 de la LCT) a cuenta de mayor valor.

Por último, esgrimió que teniendo en cuenta de que por medio del art. 11 inciso 1 de la Ley N°24557 se determinó la "irrenunciabilidad de las prestaciones dinerarias", es que se inició la presente demanda.

Corrido traslado, en fecha 06/06/2018 (fs. 63/70) se presentó el letrado Gerardo Félix Padilla, en carácter de apoderado de Asociart ART SA. En tal carácter, contestó demanda y solicitó su rechazo con expresa imposición de costas.

En primer lugar planteó falta de acción de pago, sostuvo que el actor manifestó en su demanda que por la incapacidad laboral parcial permanente y definitiva del 13,70% generada a raíz del hecho ocurrido en fecha 25/02/2015, Asociart ART le abonó la suma de \$122.171,51 en concepto del art. 14.2 "a" de la Ley N° 24557, con las mejoras del Decreto N° 1694/2009 y Ley N° 26773 y la suma de \$24.434,30 en concepto del art. 3 de la Ley N° 26773, por lo tanto remarcó que su mandante cumplió con lo establecido por la norma aplicable y que le abonó las sumas correspondientes acorde a lo establecido en el art. 2 de la Resolución N° 22/14. Añadió que su mandante le abonó al Sr. Arrieta por encima del mínimo establecido en la normativa e incluso por encima de lo establecido por la Resolución N° 28/15 que aquel pretende aplicar, afirmó que al 13,70% el piso a abonar llega a \$115.334,27, lo que no supera el monto abonado por Asociart ART, por lo tanto la excepción de pago resulta manifiestamente procedente.

Al brindar su versión de los hechos relató que su mandante recibió denuncia en carácter de DDJJ por la que se manifestó que el actor, al bajar de su automóvil, fue pisado en su pierna izquierda por una moto -considerado el acontecimiento como accidente de trabajo-, pues ocurrió cuando visitaba un cliente de su empleador. Ante aquel hecho, su mandante procedió a brindar la totalidad de las prestaciones devengadas en razón del contrato a su favor suscripto con Migra Distribuciones SRL, acorde a la legislación vigente a momento del hecho, esto es el 25/02/2015.

Por último, contestó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley N° 24557.

Corrido el traslado del planteo de falta de acción interpuesto por la demandada, se presentó nuevamente el letrado Ángel Miguel Palacio en representación de la actora, quien contestó y solicitó que se rechace. Argumentó que surge claramente del texto del escrito de demanda que el Sr. Viscido manifestó en forma expresa que estaba trabajando para sus dos empleadores cuando sufrió el accidente laboral, ello es así, porque era viajante “no exclusivo” y que al momento del accidente estaba presando “sus labores habituales” para sus “empleadores”, es decir que se denunció la existencia del “pluriempleo”.

Por lo tanto, esgrimió que la demanda fue instaurada para percibir además la diferencia de las prestaciones dinerarias, puesto que la demandada, al momento de abonar por la ILPPD, solo liquidó teniendo en consideración un solo empleo, desconociendo lo estipulado por el art. 13 inciso “c” del Decreto N° 491 aplicable a los casos en los que se produce alguna de las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 en situación de pluriempleo.

Mediante proveído de fecha 27/07/2018 se abrió la causa a prueba.

Las partes fueron convocadas a la audiencia del art. 69 del CPL para el día 22/04/2019; en dicha oportunidad se tuvo por fracasada la conciliación por no haber comparecido ninguna y se ordenó proveer las pruebas ofrecidas.

El 30/10/2019 se procedió por Secretaría Actuarial a confeccionar el informe requerido por el art. 101 del CPL, del que surge que la parte actora ofreció: 1) Constancia de autos: producida. 2) Exhibición de documentación: producida. 3) documental/informativa: producida. 4) Informativa: producida. 5) Informativa: producida y 5) Pericial contable: producida.

En fecha 13/11/2019 se remitieron las actuaciones al Ministerio Público Fiscal a fin de que se expida sobre los planteos de inconstitucionalidad deducidos en la demanda. El dictamen fue efectuado por la Sra. Agente Fiscal de la II° Nominación.

En fecha 28/05/2020 se dejó constancia actuarial de la presentación de alegatos por las partes dentro del término legal.

Finalmente se ordenó el pase de las actuaciones para el dictado de sentencia definitiva.

CONSIDERANDO:

De acuerdo a los términos de la demanda y su contestación son cuestiones admitidas expresa o tácitamente por las partes: 1) La relación de dependencia del actor con la firma “Migra Distribuciones SRL”. 2) La afiliación de esta empresa con la demandada Asociart ART SA y su vigencia durante la fecha del siniestro. 3) El accidente sufrido por el Sr. Juan Andrés Viscido en fecha 25/02/2015. 4) El dictamen emitido por la Comisión Médica N° 1 que determinó que el actor padecía una incapacidad laboral parcial permanente y definitiva del 13,70% de la total obrera. 5) Que el accionante recibió de Asociart ART SA la suma de \$146.605,81 en concepto del art. 14 inciso 2 apartado “a” de la Ley N° 24557 y art. 3 de la Ley N° 26773.

Por ello, las cuestiones litigiosas, controvertidas y de justificación necesaria sobre las que este sentenciante deberá expedirse (art. 214 inc. 5 del CPCC supletorio) son las siguientes: 1) Responsabilidad de Asociart ART respecto del empleador "Robles, Gonzalo Miguel". 2) Procedencia de los rubros reclamados. Inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley N° 24557. Excepción de Pago. 3) Intereses, costas y honorarios.

PRIMERA CUESTIÓN

Responsabilidad de Asociart ART respecto del empleador "Gonzalo Miguel Robles"

La parte actora afirmó que la accionada abonó al actor por la incapacidad laboral parcial permanente y definitiva del 13,70% generada a raíz del hecho ocurrido en fecha 25/02/2015 teniendo en cuenta un solo empleo (Migra Distribuciones SRL), desconociendo de esa manera lo estipulado por el art. 13 inciso "c" del Decreto N° 491 aplicable a los casos en los que se produce alguna de las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 en situación de pluriempleo. Al respecto, es necesario destacar que en oportunidad de responder la demanda, Asociart ART no dio precisión alguna respecto de la empleadora "Robles".

Dicho esto, resta analizar el material probatorio rendido en autos.

De la prueba instrumental en poder de terceros (CPA3) remitida por la Superintendencia de riesgos de trabajo, surge del historial de CUIL respecto de accidentes -del Sr. Juan Andrés Viscido- que existen dos denuncias identificadas con nro. de accidente 9221693201500953100 en fecha 25/02/2015 y otra con el nro. de accidente 9221748201501105500 en fecha 24/02/2015, siendo empleador en el primer siniestro "Migra Distribuciones SRL" y en el segundo "Robles Gonzalo Miguel".

De las pruebas analizadas puede observarse que se trata del mismo accidente, pues en el formulario de inicio para la determinación de incapacidad del siniestro 9221693201500953100 (Expte. SRT N° 161148/15) el actor relató que al bajarse del auto e intentar cruzar la calle lo chocaron sufriendo lesiones en su pierna izquierda indicando que la fecha del siniestro fue el 24/02/2015.

Ahora bien, el empleador "Gonzalo Miguel Robles" respondió concretamente que el Sr. Viscido era dependiente suyo y que durante el mes de febrero/2015 contaba con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo y que aquella era "Asociart ART" (CPA5).

De los puntos de pericias N° 1, 3 y 9 propuestos por la parte actora (CPA6): "1) Informe si el Sr. Juan Andrés Viscido DNI 27.652.094 trabajaba bajo la dependencia económica, jurídica y técnica de Migra Distribuciones SRL con domicilio en calle Viamonte N° 1346 de esta ciudad y de Robles Gonzalo Miguel con domicilio en calle Viamonte N° 1352; 3) Informe si durante el mes de febrero de 2015 contaban los

empleadores del Sr. Juan Andrés Viscido... con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo. En su caso afirmativo, informe el nombre de la misma; 9) Informe el Sr. Perito quien fue la encargada de realizar la denuncia del accidente laboral del 25/02/2015 sufrido por el Sr. Juan Andrés Viscido ante la aseguradora de riesgos de trabajo". La perito María Florencia González informó lo siguiente: "1)... por lo que puedo concluir que el Sr. Juan Andrés Viscido era empleado de Migra Distribuciones SRL y Robles Gonzalo Miguel", 3) "El Sr. Viscido contaba con la cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo de Asociart ART SA de acuerdo a las copias de las consultas en la superintendencia de riesgo de trabajo efectuadas por Asociart ART SA", y 9) "la denuncia del accidente laboral fue realizada en el caso de Migra Distribuciones SRL por el Sr. Saavedra Carlos E. (DNI 13.066.853) y en el caso de Robles Gonzalo Miguel por el Sr. Pablo Daniel Jaime(DNI 23.238.389) de acuerdo a lo constatado en las copias de denuncias de los empleadores en cuestión en la aseguradora de riesgo de trabajo Asociart ART SA".

Luego de analizar las pruebas aportadas al proceso y teniendo en cuenta que la pericial contable no fue impugnada por la parte demandada, puedo concluir que efectivamente existió una denuncia a la ART demandada, con relación al siniestro del 25/2/2015 respecto del actor y por su relación laboral con "Robles Gonzalo Miguel", presumiendo que aquella fue realizada en la misma fecha del siniestro, es decir, el 24/02/2015 por el accidente laboral sufrido por el Sr. Viscido.

Ahora bien, el actor denunció expresamente haber sido un viajante "no exclusivo", pues laboraba para "Migra Distribuciones SRL" y para "Gonzalo Miguel Robles". La exclusividad no es una característica necesaria para que exista la figura de "viajante de comercio", ya que el trabajador puede representar a uno o varios empleadores en un determinado ámbito, salvo que se celebre un pacto de exclusividad con un solo empleador, obligándose a representarlo únicamente a él. Es decir, la relación del viajante con el empresario presenta singulares aspectos, ya que no tiene obligación de cumplir horario ni de asistir a la sede de la principal, precisamente por la modalidad de la prestación de servicios del viajante de comercio; la programación de sus tareas por lo general está librada de su iniciativa personal.

En ese sentido, la ley sólo exige que la actividad sea desempeñada en forma habitual, lo cual implica la realización de negocios en forma repetida y frecuente. No excluye la posibilidad de que el viajante pueda establecer otro vínculo de similar naturaleza con otros empleadores o bien de distinta naturaleza, como ser la de integrar una sociedad propietaria de negocio." (cf. CSJ de Chaco, "Razeto, Dante Francisco c. Camilo Perrón S.A. S s/ Despido directo", sent. n° 98110021 del 20/04/1998). También se dijo que, "En tanto el viajante cumple su débito en lugares o plazas que no coinciden con la ubicación de la empresa, no resulta indispensable el cumplimiento de horario o la concurrencia al establecimiento, ya que estas son modalidades propias de la relación subordinada normal." (cf. CNSeg. Social, sala II, "Camarero, Manuel c/ Caja

Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”; sent. n°937 del 22/05/1990).

En materia de remuneración corresponde la percepción de comisiones por ventas y eventualmente si así se pacta por cobranzas, es decir que es esencialmente por resultados y no por tiempo.

Entonces al ser el Sr. Viscido un viajante de comercio no exclusivo, puedo concluir que en esa particular situación no hay óbice para que un mismo trabajador tenga dos o más contratos de trabajo al mismo tiempo, lo que acaba configurando una situación que puede calificarse como “pluriempleo” (tal como lo describe la parte actora en su demanda) en cabeza de una sola persona, pues al no tener que cumplir horario ni asistir a la sede principal del establecimiento, puede desempeñarse para más de un empleador al mismo tiempo.

Luego de lo expuesto, estoy en condiciones de anticipar que para la situación en la que se encuadra el actor (pluriempleo), resulta aplicable al caso lo normado por el art. 45 de la LRT y el art. 13 del Decreto N° 491/97.

El inciso “b” del mencionado Decreto expresamente reza: *“Cuando por las circunstancias del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional el hecho fuera atribuible a más de un empleo, las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus derechohabientes, según el caso, por la Aseguradora del empleador respecto al cual el damnificado haya devengado mayor remuneración sujeta a cotización en el mes anterior a la primera manifestación invalidante”*.

A su turno, el inciso ‘c’ del mismo decreto regula lo siguiente: La cuantía de las prestaciones dinerarias se determinará en relación a los ingresos base del trabajador en las actividades que impliquen la presencia del agente de riesgo, o respecto de los empleos para los cuales se hubiera encontrado trabajando en el momento de producirse el accidente.

Así entonces, teniendo en cuenta que se encuentra acreditado (y no controvertido por la demandada) que el actor cumplía sus prestaciones laborales a favor de ambos empleadores en forma indistinta y simultánea durante su jornada - debido a su carácter de viajante no exclusivo- puede presumirse válidamente que el accionante sufrió el accidente laboral el día 25/2/2015 en ocasión de cumplir sus tareas para ambos empleadores (Migra y Robles).

Esta presunción se refuerza debido a que, tal como surge de la prueba reseñada oportunamente, la aseguradora demandada recibió la denuncia del siniestro realizada a favor del actor por su prestación laboral para su empleador Robles, pero no consta (por no existir prueba alguna que se haya presentado o producido en estos autos) que haya rechazado la cobertura de dicho siniestro en el plazo que establece el art. 6° del Decreto N° 717/96.

Este silencio de la demandada debe ser considerado como aceptación de la pretensión, tal como lo establece la misma norma antes referida.

Esto es así, porque la norma impone una obligación a la ART y es que se expida expresamente aceptando o rechazando la denuncia en un plazo determinado. El incumplimiento por parte de la ART a esta obligación genera una presunción *iure et de iure* (sin prueba en contrario) interpretativa de su silencio, lo que es la aceptación del siniestro denunciado (Rodríguez Mancini, Jorge y Foglia, Ricardo (Directores) “Riesgos del trabajo”, La Ley, Buenos Aires, 1ra ed., 2008, pág. 586).

Otra cuestión no controvertida en autos es que la accionada resultaba ser la misma aseguradora de riesgos del trabajo de ambos empleadores del actor; situación que incluso se encuentra corroborada con los documentos agregados en autos (anteriormente fueron reseñados) y con el informe pericial contable producido en la causa.

Así entonces, teniendo en cuenta que la demandada admitió la cobertura del accidente respecto de las dos denuncias recibidas por ambos empleadores del actor y debido a que, por las características de la modalidad de prestación del servicio (viajante de comercio no exclusivo), es dable presumir que al momento del siniestro se encontraba en ocasión del trabajo de ambos empleos (pluriempleo simultaneo), la aseguradora demandada debe la prestación dineraria por ILPPD determinada por la CM01 de la SRT calculada “en relación a los ingresos base del trabajador” “respecto de los empleos para los cuales se hubiera encontrado trabajando en el momento de producirse el accidente” (conf. art. 13 inciso ‘c’ del Decreto N° 491/97), es decir, calculando la prestación dineraria sobre la base de los salarios que percibía el actor de sus dos empleadores, al momento del accidente.

Por lo expuesto, corresponde que la demandada Asociart ART SA responda por el accidente de trabajo sufrido por el Sr. Juan Andrés Viscido tanto por “Migra Distribuciones SRL” como por “Robles Gonzalo Miguel”. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTION

Procedencia de los rubros reclamados. Diferencia indemnización art. 14.2“a” de la Ley 24557 modificado por el Decreto N° 1694/09.

Considero necesario abordar este análisis señalando que, en 1995, la LRT, estableció un sistema de reparación de los accidentes y enfermedades laborales, por el cual la compañía aseguradora contratada por el empleador debía pagarle al trabajador una prestación dineraria (“indemnización”) que se determina tomando, como parámetros, la edad de la víctima, el sueldo que cobraba y la medida en que quedó incapacitada para seguir trabajando. En el año 2000, a la indemnización así calculada, se le añadió el pago de una suma fija que variaba de acuerdo con el mayor o menor grado de la incapacidad sufrida por el trabajador. A fines de 2009 -por Decreto N°1694/09-, la indemnización adicional de suma fija fue elevada a \$80.000, \$100.000

y \$120.000, respectivamente, según rango de grado de incapacidad determinado en cada caso; y para la indemnización variable se fijó un piso mínimo que, por ejemplo, para los casos de incapacidad total o muerte, ascendía a \$180.000, es decir, que la aseguradora jamás podía pagar menos de este importe, aunque el sueldo de la víctima hubiera sido muy bajo. En octubre de 2012, este sistema especial de reparación de los accidentes y enfermedades laborales, tuvo un nuevo reajuste, a través de la Ley N°26773 la que, concretamente, instauró que aquellos importes fijados a fines de 2009 -para el piso mínimo de las indemnizaciones variables y para las indemnizaciones adicionales de suma fija- debían actualizarse a valores de octubre de 2012, tomando en cuenta la variación del índice “RIPTE” (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (SSSMT), esto es, un índice de medición del incremento de los salarios. La ley también estableció que, a partir de octubre de 2012, los importes en cuestión (piso mínimo e indemnización fija adicional) se actualizarían por el índice RIPTE cada seis meses. En este sentido, el art. 17 inc. 5 de la Ley N° 26773 dejó en claro que sus nuevas disposiciones en materia de indemnizaciones, regirían para el futuro -pues solamente se aplicarían a los accidentes y enfermedades laborales cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de la fecha en la que la nueva ley fue publicada en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012)- y así fue interpretado y decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso de queja s/Accidente-ley especial”(sentencia del 07/06/2016).

Ahora bien, para calcular la diferencia reclamada por el actor en cuanto a la determinación del ingreso base mensual (IBM), se fijará en un “promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y difundido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.”

Para la determinación del IBM estoy en condiciones de anticipar que no obra en la causa medio probatorio alguno que acredite la totalidad de las remuneraciones percibidas por el sr. Viscido durante el período previsto en la normativa. Es que en el escrito de demanda sólo indicó la remuneración a los fines indemnizatorios (IBM) y acompañó seis recibos de haberes emitidos por “Migra Distribuciones SRL” y otros seis del mismo período emitido por el empleador “Gonzalo Miguel Robles”, lo que resulta insuficiente para efectuar un cálculo, pues la norma antes mencionada expresamente indica que deben computarse los salarios correspondientes a los doce meses anteriores al infortunio (conf. CSJT, sent. n° 1633 del 13/09/2019 “Agüero Domingo Oscar y otros vs. Caja Popular de Tucumán ART s/ indemnizaciones”). No ofreció, por ejemplo, pedido de informes a la AFIP, requiriendo historial de aportes y

contribuciones y, en la prueba de exhibición (CPA2), no solicitó documentación apta para resolver esta cuestión.

En este sentido, es menester mencionar que no resulta incumbencia del sentenciante indagar más al respecto, debiendo estar a lo contenido en la Ley de Contrato de Trabajo (art. 56).

Entonces, en este caso para poder realizar el cálculo teniendo en cuenta que el actor no aportó la totalidad de los recibos de sueldo, corresponde tomar los montos de los doce recibos de sueldo (seis de cada empleador) del Sr. Viscido -los cuales corresponden a los meses de enero y febrero del año 2015 y de septiembre a diciembre del año 2014-, y para los meses de agosto a marzo del año 2014 tomaré como referencia el salario mínimo vital y móvil vigente a esa época fijado en \$4.400 (Resolución 3-2014 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicada en el Boletín Oficial el día 01/09/2014).

De esta manera quedan completos los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante del siniestro denunciado. Así lo declaro.

En este sentido, es menester mencionar que no puede tomarse la garantía mínima mensual inicial de remuneración determinada para aquella época (conforme el art. 16 del CCT 308/75), ya que aquel expresamente refiere a que se establece para los trabajadores que son “viajantes exclusivos”, categoría en la que no podría encuadrarse el actor, teniendo en cuenta lo que expresamente denunció en su escrito de demanda.

Art. 3 de la Ley N°26773: teniendo en cuenta que está reconocido que el actor protagonizó el infortunio estando a disposición de ambos empleadores “Migra Distribuciones SRL” y “Gonzalo Miguel Robles”, este rubro resulta admisible. En este sentido, el reclamante es acreedor de esta indemnización adicional de pago único, equivalente al 20% de la suma que resulte del cálculo del rubro prestación dineraria del art. 14.2 “a” de la Ley N° 24557. Así lo declaro.

Finalmente, corresponde efectuar las deducciones pertinentes de acuerdo a las liquidaciones en concepto de ambos rubros (art. 14.2 “a” de la Ley N° 24557 y art. 3 de la Ley N° 26773) esto es, la suma total de \$146.605,81 ya que las partes reconocieron que el Sr. Viscido ya percibió aquella suma.

Inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley N° 24557

El actor planteo la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley N° 24557 fundando su pretensión en que si bien la Ley N° 26773 introdujo importantes mejoras, mantuvo intocados muchos aspectos de la LRT. Esta norma determinó como base de cálculo de las prestaciones dinerarias de la LRT *“la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al sistema integrado de jubilaciones y pensiones devengadas en los 12 (doce) meses anteriores*

a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicios si fuera menor a un año por el número de días corridos comprendidos en el periodo considerado". Argumentó que solo se puede justificar esta disposición si nos ubicamos en la época en que fue pensada, o sea a mediados de la década de los 90, cuando la inflación parecía derrotada. Añadió que el promedio anual de remuneraciones, en épocas de varios incrementos en los salarios de los trabajadores durante el año, conduce inevitablemente a la licuación del crédito de la víctima, pues el IBM así calculado, se aleja indefectiblemente de la remuneración real del trabajador.

En virtud de lo tratado en la segunda cuestión, y que en el presente caso se aplican las disposiciones contenidas en el Decreto N° 669/12 (que modificaron las pautas del art. 12 LRT), el que -tal como se reseñó- sí contiene un modo de actualizar las prestaciones dinerarias a cargo de las ART, resulta abstracto su tratamiento, considerando los fundamentos que expuso la actora para impugnar la legitimidad del art. 12 de la LRT.

Excepción de pago total

La demandada en su defensa adujo que el actor pretende reclamar una indemnización que ya percibió. De esta forma opuso excepción de pago y afirmó que abonó al actor las sumas correspondientes acorde a lo establecido por el art. 2 de la Resolución 22/1, remarcó que se le abonó una suma superior al mínimo establecido en la norma incluso por encima de la Resolución 28/15 que aquel pretende aplicar.

Cabe señalar -conforme la primera cuestión- que la demanda debió responder por ambos empleadores y según surge de las constancias de autos solamente respondió por "Migra Distribuciones SRL".

De esta manera, se debe considerar que la parte actora reconoció -sin perjuicio de su reclamo por la diferencia- que la demandada abonó la suma de \$146.605,81 en concepto de liquidación por incapacidad laboral parcial y permanente definitiva y por el pago adicional del art. 3 de la Ley N° 26773. De modo que, luego de efectuar las operaciones correspondientes al cálculo indemnizatorio de acuerdo a lo decidido precedentemente, se deberá descontar dicha suma, tal como se decidió en la segunda cuestión. Así lo declaro.

TERCERA CUESTION

INTERESES

Para la actualización del crédito del trabajador, resultan de aplicación las disposiciones del decreto n° 669/19 -atento a lo dispuesto en su art. 3- así como lo previsto en el art. 4 de la Ley N° 26773.

En este sentido, resulta necesario recordar que el inc. 2 del art. 12 de la LRT (cfr. Ley N° 27348) establecía que, a los fines de la actualización de las indemnizaciones, se aplique un interés equivalente al promedio de la tasa activa

cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina (BNA).

En los considerandos del Decreto N° 669/19 se explica que aquella modalidad tuvo como finalidad incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del ingreso base. No obstante, la evolución de las variables macroeconómicas evidenció que ese método de ajuste no alcanzó el fin pretendido, comprometiendo la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores. En efecto, señaló que se producía un desequilibrio financiero que atentaba contra la solvencia del sistema, mediante incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones.

En virtud de ello, el Decreto N° 669/19 modifica la fórmula de actualización del ingreso base.

De este modo, por aplicación de lo dispuesto en su art. 1, cabe decir que en el presente caso el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el dictado de esta resolución. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el cálculo de los valores actualizando por Ripte se efectuará hasta la fecha de pago de las prestaciones por parte de la demandada (18 de marzo del año 2016, según documentación acompañada por la demandada con el libelo inicial), luego se descontará la suma abonada y el saldo restante se actualizará nuevamente con RIPTE hasta el mes de octubre 2022 (último RIPTE publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Nación a la fecha de la presente resolutive).

Asimismo, para el supuesto que la demandada incurra en incumplimiento de sus obligaciones, atento a lo previsto en el art. 4 de la Ley N° 26773 y lo dispuesto por el apartado 3 del art. 12 de la LRT (cfr. modificaciones introducidas por el Decreto N° 669/19), el crédito devengará un interés compensatorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a los 30 días del BNA, a partir de los quince días de la notificación de este pronunciamiento y hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así lo declaro.

PLANILLA DE CONDENA:

<u>1) Indemnización por reagravamiento de ILPP actualizado a Marzo 2016</u>		
53x\$13.501,98x1,857x0,1370	<u>\$ 182.070,39</u>	\$ 182.070,39
Ingreso mensual Base	\$ 13.501,98	
coef. De edad : 65/35 años	1,857	
Porcentaje de invalidez	13,70%	
fecha de la manifestación	25/02/2015	
Tope minimo (Conf.RESOL-2021-7-SRT)	\$ 84.996,72	

2) Prestación adicional Art. 3° Ley 26.773

\$ 182.070,39 x 20%	\$ 36.414,08
Total Rubros 1) y 2)	\$ 218.484,47
Importe cobrado en marzo 2016	\$ -146.605,81
Total neto al 30/08/2021	\$ 71.878,66
<u>coeficiente de actualización de Marzo 2016 a octubre 2022</u>	
Indice RIPTE Oct. 2022	19.938,61
Indice RIPTE Marzo 2016	10,2747
	1.940,55
Importe Neto actualizado a la fecha de sentencia	\$ 738.533,15

COSTAS

Teniendo en cuenta el resultado del proceso, estimo de justicia imponer las costas en forma proporcional. En virtud de ello, la demandada deberá soportar el 60% de las costas devengadas en el proceso, siendo el actor responsable del 40% restante. Así lo declaro.

HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescripto en el art. 46 inc. 2 de la Ley N° 6204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso 2) de la citada ley, por lo que se toma como base el 50% del monto reclamado en la demanda, actualizado al /10/2022 con tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales (Cfr. Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo y otros/ daños y perjuicios, sent. Nro. 937 del 23/09/2014; Fernández, Ramón Antonio vs. Castro, Héctor Agustín s/ daños y perjuicios, sent. Nro. 795 del 06/08/2015; Porcel Fanny Elizabeth vs. La Luguenze S.R.L. s/ Despido, sent. Nro. 1267 del 17/12/2014; Gregoire, Mabel del Valle vs. Acosta Silvia María s/ Cobro de pesos, sent. Nro. 1277 del 22/12/2014; Zurita Graciela Norma vs. Citytech S.A. s/ Cobro de pesos, sent. Nro. 324 del 15/04/2015; entre otras). Los cálculos efectuados arrojan la suma de \$377.277,28.

De conformidad con lo normado por los artículos 15, 39, 40 y ccdtes. de la Ley N° 5480 y 51 del CPL, se regulan los siguientes honorarios:

1) Por la parte actora intervino el letrado Ángel Miguel Palacio como apoderado. Por el principal, estimo de justicia regular a este profesional el 11% con más el 55% de la base regulatoria, por su actuación en el doble carácter en tres etapas del proceso, lo que arroja la suma de \$64.325,78 (base x 11% más 55% por el doble carácter).

2) Por la parte demandada intervino el Dr. Gerardo Félix Padilla como apoderado. Por el principal, estimo de justicia regular a esta profesional el 11% con más el 55% de la base regulatoria, por su actuación en el doble carácter a lo largo de tres etapas del proceso, lo que arroja la suma de **\$64.325,78** (base x 11% más 55% por el doble carácter).

Ahora bien, en virtud de lo establecido por el art. 38 último párrafo de la Ley N° 5480, siendo que el monto resultante por el proceso principal es inferior al valor mínimo sugerido para una consulta escrita (según Resolución del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán del 12/09/2022), los emolumentos de los profesionales no podrán ser inferiores a dicha suma, por lo que corresponde regular los honorarios profesionales por su actuación en el proceso principal en la suma de \$75.000 (pesos setenta y cinco mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de **\$116.250** (pesos ciento dieciséis mil doscientos cincuenta) a cada uno de los letrados intervinientes.

3) A la perito contadora, CPN María Florencia Fernández, por el informe pericial contable en fecha 18/09/2019 (CPDA6), la suma de **\$7.545,55** (base x 2%). Teniendo en cuenta que esta suma evidencia una injustificada desproporción en relación a los honorarios de los otros profesionales intervinientes, y teniendo en cuenta la importancia de la labor cumplida por esta profesional, en uso de las facultades establecidas por el art. 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), resulta equitativo elevar el monto calculado a la suma de **\$25.000**.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I) ADMITIR PARCIALMENTE LA DEMANDA promovida por Juan Andrés Viscido, DNI N° 27.652.094, con domicilio en calle 25 de mayo N° 2451, de esta ciudad, en contra de Asociart ART SA con domicilio en San Lorenzo N° 1064 de esta ciudad,, de acuerdo a lo considerado. En consecuencia, se condena a esta última al pago de la suma total de **\$738.533,15** (pesos setecientos treinta y ocho mil quinientos treinta y tres con quince centavos), en concepto de diferencias de prestación dineraria del art. 14 inciso 2 “a” de la Ley N° 24557 y art. 3 de la Ley 26.773, debiendo abonar dicho importe en el plazo de diez días de ejecutoriada la presente.

II) COSTAS: Como se consideran.

III) HONORARIOS: 1) Al letrado Ángel Miguel Palacio, por su actuación en autos como apoderado de la parte actora en la suma de **\$116.250**. 2) Al letrado Gerardo Félix Padilla, por su actuación en autos como apoderado de la parte demandada en la suma de **\$116.250**. 3) A la perito CPN María Fernanda Fernández en la suma de **\$25.000**, atento a lo considerado.

IV) PLANILLA FISCAL: Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13 de la Ley N°6204).

V) COMUNÍQUESE a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER.^{EMC}

Juez
Juzgado del Trabajo de VIª Nominación